

Las nulidades en el proceso federal del 2003*

LUIS EDUARDO MEDINA TORRES

En el proceso electoral federal del 2003, se presentaron 128 juicios de inconformidad ante las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 63 recursos de reconsideración en la Sala Superior del mismo Tribunal, de estos recursos 53 fueron contra las elecciones de diputados de mayoría relativa y 10 para impugnar la asignación de representación proporcional (Boletín de prensa núm. 047/2003 del 28 de agosto del 2003 de la Sala Superior).

De los recursos de reconsideración destacan las anulaciones en los distritos correspondientes a Torreón, Coahuila y Zamora, Michoacán; también fueron relevantes la recomposición del cómputo de representación proporcional, las asignaciones correspondientes y las medidas provisionales en tanto cuanto se realizan los comicios extraordinarios en los distritos antedichos.

En este artículo analizaremos los argumentos que planteó la Sala Superior para determinar la anulación de las elecciones en los distritos de Torreón y Zamora, especialmente lo relativo a las causales de nulidad que fueron utilizadas en ambos casos; revisaremos además la reconfiguración del cómputo de representación proporcional, ya que al anular la Sala Superior los resultados de mayoría relativa decidió que también tienen que ser descontados los votos de la vía proporcional en esos distritos; finalmente, comentaremos las medidas que la Sala ordenó que se lleven a cabo, hasta que sea realicen los comicios extraordinarios.

LAS CAUSALES DE NULIDAD

En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (*LGSMIME*, 1997, TEPJF) aparecen las distintas causales que permiten

* Para Aldahir y Anabel.

determinar al órgano jurisdiccional, si es procedente declarar la nulidad de la votación recibida en una casilla específica, en un distrito, en una entidad federativa o en una circunscripción.

En particular las nulidades están contempladas en el libro segundo, título sexto, capítulos I al III de la *LGSIME*. En específico los artículos del 75 al 78 son los aplicables para la nulidad de la votación recibida en casilla y de una elección de diputados o de senadores.

El artículo 75 contempla las once causales de nulidad de la votación recibida en casilla: a) instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital; b) entregar, sin causa justificada, el paquete electoral fuera de los plazos planteados por el COFIPE; c) realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en lugar diferente al determinado por el Consejo; d) recibir la votación en fecha distinta a la señalada; e) recibir la votación personas distintas a las facultadas por el COFIPE; f) haber mediado dolo o error en la computación de los votos, cuando esto sea determinante para el resultado; g) permitir a ciudadanos votar sin credencial de elector o cuando no aparezcan en la lista nominal; h) haber impedido el acceso de los representantes de partidos o haberlos expulsado; i) ejercer violencia física o presión sobre los integrantes de la mesa directiva; j) impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto; k) existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que sean determinantes para el resultado.

Por su parte, el artículo 76 plantea las tres causales por las que puede decretarse "la nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal": a) cuando las causales de anulación correspondientes a las casillas se acrediten, por lo menos, en el veinte por ciento de ellas; b) cuando no se instalen las casillas en el veinte por ciento de las secciones del distrito; y, c) cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos sean declarados inelegibles. El artículo 77 estipula las tres "causales de nulidad de una elección de senadores en una entidad federativa", las cuales son similares a las del artículo anterior.

El artículo 78 es conveniente citarlo textualmente porque fue uno de los argumentos principales para determinar las anulaciones; en éste artículo está contenida la denominada causal genérica que tiene características distintas a las específicas:

Artículo 78. 1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito y entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

Como la propia jurisprudencia del Tribunal ha señalado, la causal genérica es diferente tanto en sentido como en alcances frente a las causales específicas. La genérica es una causal mediante la que se pueden impugnar conductas que no están tipificadas en las once causales de nulidad de la votación recibida en las casillas que podrían actualizar algunos de los supuestos de los artículos 76 y 77.

(235

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.—Las causas específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, previstas en los incisos a) al j), del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son diferentes a la causa de nulidad que se ha identificado como genérica, establecida en el inciso k) del mismo precepto legal, en virtud de que esta última se integra por elementos distintos a los enunciados en los incisos que preceden. La mencionada causa de nulidad genérica, pese a que guarda identidad con el elemento normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas, como es el que la irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la votación a fin de que se justifique la anulación de la votación recibida en casilla, es completamente distinta, porque establece que la existencia de la causa de referencia depende de circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten irregularidades graves y que concurren los requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad identificadas en los incisos que le preceden; es decir, en algunas de las causas específicas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es distinto al de la llamada causa genérica.

Tercera Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-046/97.—Partido Revolucionario Institucional.—19 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-006/2000.—Coalición Alianza por México.—16 de agosto de 2000.—Unanimidad de votos.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-021/2000 y acumulado.—Coalición Alianza por México.—16 de agosto de 2000.—Unanimidad de votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 40/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 150.

Así tenemos que la causal genérica puede actualizarse durante la jornada electoral y en el llamado "periodo de reflexión": los tres días previos a las votaciones en los cuales no puede realizarse proselitismo, pero no durante las campañas electorales. Ante esta limitación, el propio Tribunal se planteó desde el año 2000 la necesidad de incorporar, vía jurisprudencia, otra causal que permita impugnar actos realizados antes de la jornada electoral y durante las campañas: la causal abstracta.

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco).— Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establecen principios fundamentales como: el sufragio universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad. Estos principios deben observarse en los comicios, para considerar que las elecciones son libres, auténticas y periódicas, tal y como se consagra en el artículo 41 de dicha Constitución, propias de un régimen democrático. Esta finalidad no se logra si se inobservan dichos principios de manera generalizada. En consecuencia, si alguno de esos principios fundamentales en una elección es vulnerado de manera importante, de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos en ellos, es inconcuso que dichos comicios no son aptos para surtir sus efectos legales y, por tanto, procede considerar actualizada la causa de nulidad de elección de tipo abstracto, derivada de los preceptos constitucionales señalados. Tal violación a dichos principios fundamentales podría darse, por ejemplo, si los partidos políticos no tuvieran acceso a los medios de comunicación en términos de equidad; si el financiamiento privado prevaleciera sobre el público, o bien, si la libertad del sufragio del ciudadano fuera coartada de cualquier forma, etcétera. Consecuentemente, si los citados principios fundamentales dan sustento y soporte a cualquier elección democrática, resulta que la afectación grave y generalizada de cualquiera de ellos provocaría que la elección de que se trate carecería de pleno sustento constitucional y, en consecuencia, procedería declarar la anulación de tales comicios, por no haberse ajustado a los lineamientos constitucionales a los que toda elección debe sujetarse.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-487/2000 y acumulado.—Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional.—29 de diciembre de 2000.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Mauro Miguel

Reyes Zapata.—Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.—El Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo no intervino, por excusa.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.

Revista *Justicia Electoral* 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 101-102, Sala Superior, tesis S3EL 011/2001.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 577.

La tesis anterior nos permite entender los contenidos de la causal abstracta: primero, tutela los principios de un régimen democrático; segundo, al garantizar principios son diferentes los actos que pueden ser impugnados; tercero, la actualización de la causal no está sujeta únicamente al día de la votación, sino que se extiende a todo el proceso electoral.

Como puede notarse tanto la causal genérica como la abstracta son complementarias y ambas extienden la posibilidad de impugnar diversos actos; la genérica con respecto a aquellas conductas no tipificadas en las once causales de nulidad de la votación recibida en las casillas y la causal abstracta a cuestionar acontecimientos suscitados durante las distintas etapas del proceso electoral. Es pertinente tomar en cuenta estas posibilidades porque a continuación revisaremos los argumentos que la Sala Superior formuló para decretar la nulidad de la elección en los distritos de Torreón y Zamora.

LOS CASOS DE TORREÓN Y ZAMORA

Es conveniente señalar desde este momento que la resolución de las dos sentencias fue tomada por mayoría; esto implica que los razonamientos que la Sala Superior planteó en ambos casos tuvieron objeciones por parte de algunos magistrados electorales quienes formularon votos particulares.

En el caso de Torreón, la votación fue de cuatro contra tres; mientras que en el de Zamora fue de seis contra uno, con el añadido en éste segundo de la salvedad de un voto por parte de una Magistrada quien si bien aprobó la anulación no estuvo de acuerdo con todos los razonamientos de la sentencia.

Veamos los argumentos de la Sala Superior en el caso de Torreón (SUP-REC-009/2003 y 010/2003). El partido impugnante, en este caso el PRI, señaló en su escrito del recurso de reconsideración que la Sala Regional

con sede en Monterrey, Nuevo León, incumplió el principio de exhaustividad, ya que no valoró en su conjunto el impacto que las distintas conductas atribuidas al PAN pudieron afectar el resultado de la elección (pp. 202 y ss., de la Sentencia).

La Sala Superior le dio la razón al PRI y determinó que tanto los agravios planteados por casilla como las causales genérica y abstracta tendrían que ser analizados en conjunto, por lo que procedió a reparar el procedimiento que la Sala Regional incumplió (pp. 229-30 de la Sentencia).

Más adelante, la Sala Superior señala que el análisis de la causal abstracta planteada por el impugnante tiene que realizarse de acuerdo a las siguientes consideraciones:

4. Es premisa fundamental de la causa abstracta el que la revisión total de esos principios o postulados esenciales puede darse en el momento de la calificación de la elección; de ello dependerá que se declare válida o no esa elección, ya que otro principio fundamental del Derecho Electoral Mexicano es que todos los actos y resoluciones se sometan invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, a través de un sistema de medios de impugnación.
5. La prueba indiciaria resulta ser la idónea para la comprobación de las violaciones que dan lugar a esta causa de nulidad, en virtud de que para la demostración de la inobservancia de los elementos constitutivos de una elección democrática, auténtica y libre, con relación a unos comicios determinados, debe tenerse en cuenta que los hechos o circunstancias que dan lugar a la referida inobservancia, se encuentran en distinto contexto, lo cual ocasiona que se presenten diferentes grados de dificultad en su demostración, porque algunas veces se produce la conculcación, en virtud de un acto de autoridad con determinadas particularidades, que permiten la demostración de las afirmaciones sobre el hecho citado, mediante la prueba documental pública; pero en otras ocasiones, la inobservancia de los principios en comento implica, a su vez, la comisión de un ilícito en general o, incluso, un delito. Es patente que al presentarse esto último, el autor del ilícito trate de ocultar su obra, lo cual es difícil probar.
6. Como los elementos fundamentales cuya violación da lugar a esta causa de nulidad, son de obediencia inexcusable e irrenunciables, es innecesario que tales violaciones se encuentren expresamente referidas en la ley electoral, para que dicha causa de nulidad tenga lugar (pp. 242-43 de la sentencia).

De los razonamientos anteriores podemos desprender que, en la interpretación de la Sala Superior, la causal abstracta tendrá su sostén en la

integración de indicios, ya que es bastante complicado encontrar pruebas palmarias que demuestren las conductas impugnadas; por su parte, estas no tienen que encontrarse tipificadas en la legislación de la materia.

Ahora bien, las conductas que el partido impugnante señaló para solicitar la nulidad fueron la existencia de un grupo de intimidación, la manipulación de los programas sociales por parte del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, y la intervención de funcionarios públicos municipales durante el desarrollo de la jornada electoral.

A continuación revisaremos los argumentos de la Sala Superior respecto a los programas sociales; en ellos encontró que hubo una entrega extraordinaria de estímulos y apoyos por parte del Ayuntamiento panista de Torreón durante la campaña electoral, en fechas distintas a las programadas inicialmente (p. 306 de la sentencia).

La Sala Superior determinó que los programas sociales sí beneficiaron a los candidatos del PAN, ya que el gobierno municipal era de ese partido y, en consecuencia, al entregar extraordinariamente los beneficios correspondientes a los programas, se influyó en el ánimo del electorado para que sufragara por los candidatos panistas (p. 307 de la sentencia).

Respecto al grupo de presión, la Sala Superior estipuló que:

En efecto, la interrelación de los hechos probados, así como de los indicios obtenidos con anterioridad permiten afirmar que, el Partido Acción Nacional organizó y coordinó a un grupo de personas que en la mayoría de los casos vestían en negro, quienes realizaron actividades sistemáticas en células conformadas de tres a seis individuos, dentro de la circunscripción de la ciudad de Torreón, Coahuila, cuya finalidad aparente, fue impedir el acarreo de votantes por parte del Partido Revolucionario Institucional, actividad que se pretendió justificar bajo el argumento de que tal conducta era permitida por tratarse de delitos flagrantes; pero además de esta actividad, llevaron a cabo actos de intimidación del electorado, que enturbiaron el proceso electoral (p. 316 de la sentencia).

Como puede notarse del planteamiento anterior, la Sala Superior determinó que el susodicho grupo de presión violentó el marco constitucional al arrogarse facultades que competen a las autoridades públicas y solamente de una forma excepcional a los ciudadanos, como es la detención de presuntos delincuentes electorales, por lo que consideró como grave tal conducta atribuida a integrantes del PAN de Torreón.

Respecto a la participación de funcionarios públicos con mando directivo del Ayuntamiento de Torreón como representantes del PAN, la Sala Superior señaló que si se considera su intervención y se relaciona con la diferencia mínima respecto al resultado de la votación, entonces puede colegirse que la injerencia de dichos servidores públicos municipales pudo impactar en la definición del ganador (p. 355 de la sentencia).

Por todo lo anterior, la Sala Superior resolvió que:

Ante esa afectación a los principios rectores del proceso electoral y ante el mínimo margen de diferencia que existe entre la votación obtenida por los candidatos que ocuparon el primero y el segundo lugar, evidentemente se afecta a su vez el principio de certeza, al no poder afirmarse que la elección se llevó a cabo de manera libre, auténtica y democrática, mediante sufragio libre, secreto y directo, lo que da lugar a decretar la nulidad de la elección de diputados del Distrito Electoral 06 del Instituto Federal Electoral, con sede en Torreón, Coahuila; en consecuencia, con fundamento en el artículo 56, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se revoca la declaración de validez de dicha elección que hizo el consejo distrital respectivo, y las constancias de mayoría y validez expedidas a la fórmula de candidatos postulados por el Partido Acción Nacional, integrada por Jesús Vicente Flores Morfín como propietario y Guillermo Sánchez Chávez como suplente (p. 335 de la sentencia).

La conclusión de la mayoría de la Sala Superior es que las conductas planteadas por el partido impugnante: manipulación de programas sociales, intimidación por medio de un grupo de presión e intervención de funcionarios públicos municipales en las casillas, tuvieron suficientes indicios para considerarlas por acreditadas. Al analizar las conductas anteriores en su conjunto y dado el estrecho margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar, no se podría determinar un ganador con certeza por lo que la Sala procedió a declarar nula la elección.

Respecto al voto particular, los tres Magistrados que no estuvieron de acuerdo con la resolución de la mayoría consideraron que los argumentos planteados por el partido impugnante eran insuficientes (p. 344 de la sentencia), que los agravios relativos a la obra pública y los programas sociales eran inatendibles porque no estaba plenamente demostrada su influencia en los votantes (pp. 399 y 406 de la sentencia) y que las supuestas violaciones aducidas no fueron sustanciales ni determinantes para el resultado de la elección.

En consecuencia, dadas las consideraciones vertidas, es innegable que no se acreditan suficientemente los hechos con los cuales se pretendieron justificar supuestas causales genéricas de nulidad de la elección de diputados en el distrito electoral sexto con sede en Torreón.

Lo anterior basta para desestimar la argumentación atinente pues la causal de nulidad en estudio establece como extremos, entre otros que los hechos aducidos estén plenamente acreditados; esto es, es debe reputarse imprescindible que la irregularidad grave esté plenamente acreditada; es decir, que de la valoración conjunta de las pruebas documentales públicas o privadas, técnicas, periciales, reconocimiento e inspección ocular, presuncional legal y humana, así como instrumental de actuaciones, según consten en el expediente, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, el órgano de decisión llegue a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave, sin que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de los hechos controvertidos objeto de prueba, cuestión que no acontece en la especie según se ha asentado anteriormente (p. 396 de la sentencia).

(241

Los argumentos de la minoría nos permiten realizar un acercamiento a los criterios diferenciados que se expusieron con motivo de la resolución. Mientras que para el grupo mayoritario de Magistrados la causal abstracta se acredita con la integración de indicios, dada la dificultad de las pruebas plenas, la minoría consideró que solamente si se cuentan con elementos fehacientes podría declararse la nulidad.

También hay un criterio diferencial respecto a lo determinante o grave de las conductas y alrededor de lo generalizado de aquellas. Para la minoría es claro que solamente si se demuestra que las conductas se presentaron de manera general en el distrito (recordemos el problema de las pruebas referido anteriormente) y que dichas afectaciones determinaron el resultado de la votación, podría haberse declarado la nulidad; como en la argumentación de la minoría lo anterior no se concretó, entonces no era procedente la anulación. La discusión acerca de los criterios la retomaremos en las consideraciones finales por lo que solamente dejamos apuntados los comentarios anteriores.

Ahora revisaremos el caso de Zamora (SUP-REC-034/2003). El partido impugnante, en este caso el PRD, argumentó que la Sala Regional con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, no valoró en conjunto las pruebas que aportó y que por ello desestimó las causales genérica y abstracta de anulación; adicionalmente, solicitó que el procedimiento fuera reparado en su favor y, al corregir el cómputo de resultados, determinar que había sido su fórmula la ganadora (p. 80 y ss., de la sentencia).

La Sala Superior reconoció que en efecto la Sala Regional había incumplido con el procedimiento de valorar en su conjunto las pruebas aportadas y las conductas impugnadas por lo que era necesario analizar, en primer lugar, las causales abstracta y genérica para posteriormente revisar las específicas. Respecto a la petición del PRD, la Sala Superior no la consideró ya que determinó que se analizarían las pruebas y si de ellas resultaba una conducta ilegal se anularía la elección sin corregir el cómputo (pp.148-9 de la sentencia).

Las conductas que el PRD impugnó fueron el inicio anticipado de la campaña por parte del candidato ganador, la generación y distribución de propaganda religiosa por el PAN, la participación de funcionarios del ayuntamiento de extracción panista en las casillas como representantes del partido y el uso excesivo de *spots* publicitarios por parte del candidato triunfador al ser dueño de unas estaciones de radiodifusión.

Respecto al inicio anticipado de campaña, la Sala Superior consideró que la Sala Regional se había equivocado en su valoración porque si bien existían quejas administrativas que no habían sido resueltas por el Instituto Federal Electoral (IFE), la autoridad jurisdiccional no puede dejar de tomar en cuenta las denuncias presentadas por los distintos partidos políticos por el inicio fuera del plazo legal por parte del PAN (p. 189-93 de la sentencia).

En el caso de la propaganda religiosa, la Sala Superior realizó un extenso análisis de las restricciones constitucionales y legales acerca de aquella, sus características y el posible impacto en la conciencia de los ciudadanos. La Sala consideró que, debido al principio histórico de la separación entre el Estado y las Iglesias, existe una prohibición absoluta para vincular, aunque sea de manera informativa, las acciones de los candidatos a puestos de elección popular con actividades de tipo religioso (p. 200 y ss., de la sentencia).

Adicionalmente, estipuló que la propaganda religiosa no puede ser usada en ninguna etapa del proceso electoral: ni antes, ni durante, ni después de las campañas políticas por lo que su utilización en cualquier momento debe considerarse como grave. La Sala Superior en esa tesitura consideró que el uso de propaganda religiosa era causal suficiente para anular la elección cuanto más al existir un margen de diferencia mínimo entre el primero y el segundo lugares.

Respecto a los *spots* publicitarios, la Sala Superior señaló que las que-

jas en trámite ante la autoridad administrativa (IFE), los monitoreos presentados en el seno del Consejo Distrital y el hecho de que el candidato triunfador sea dueño de varias estaciones de radiodifusión, hacen suponer que el uso excesivo de publicidad podría documentarse como una presunción y valorarse como una influencia en el resultado de la elección (p. 264 de la sentencia).

Finalmente, en el caso de la participación de empleados públicos del Ayuntamiento de Zamora de extracción panista, la Sala Superior determinó que existe una prohibición expresa en la legislación local para que los funcionarios municipales sean representantes de partidos políticos por lo que se debía considerar como grave tal conducta, la cual si bien no afectó de manera generalizada en las casillas al vincularla con los hechos precedentes sí adquiriría un matiz de trascendencia (p. 269-72 de la sentencia).

Por todo lo anterior, la Sala Superior determinó:

En efecto, en la elección en estudio, se demostró en diferentes grados la afectación de los principios de que las elecciones deben ser libres y auténticas; el sufragio universal libre, secreto y directo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad constituyen principios rectores en el proceso electoral; el principio histórico de separación entre Estado y las Iglesias; el principio de equidad que rige en la materia electoral para que los partidos políticos lleven a cabo sus actividades (como ocurre con la realización de sus campañas electorales); así como el principio de neutralidad o imparcialidad que, entre otros sujetos, están obligados a observar los funcionarios de gobiernos, como en el caso, los municipales (p. 277 de la sentencia).

En el presente caso, se han demostrado algunas irregularidades, de otras existen indicios, unos de mayor grado convictivo que otros, y podría ser que vistos de manera individual o aislada no provoquen una consecuencia muy grave o trascendente para el resultado de la elección en el distrito electoral federal 05 con sede en Zamora, Michoacán.

Sin embargo, valorados en su conjunto esos hechos y actos, la perspectiva del resultado obtenido en la elección cambia radicalmente y nos hace sopesar esos acontecimientos aislados unos de otros, para que, vistos en un espacio temporal (el proceso electoral federal) y territorial (distrito electoral federal 05 en Zamora, Michoacán) veamos que el efecto producido es de distinta naturaleza (p. 278 de la sentencia).

Todo lo anterior debe relacionarse a su vez, con la circunstancia particular de que en el presente caso, los resultados de la elección son muy cerrados, puesto que si se atiende a la votación que obtuvieron los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar en la elección, se encuentra lo siguiente:

En el cómputo realizado por el Consejo Distrital Electoral Federal 05 con sede en Zamora, Michoacán, el Partido Acción Nacional obtuvo 26,178 votos, los que representan el 32.37 por ciento del total de votos obtenidos en la elección; el Partido de la Revolución Democrática obtuvo 25 457 votos iguales a 31.48 por ciento. La diferencia es de 721 votos, lo cual es equivalente a 0.89 por ciento.

En el cómputo recompuesto por la Sala responsable, el Partido Acción Nacional tiene 25,880 votos los que representan el 32.26 por ciento del total de votos obtenidos en la elección; el Partido de la Revolución Democrática obtuvo 25 324 votos iguales a 31.57 por ciento. La diferencia es de 556 votos, lo cual es equivalente a 0.69 por ciento. Esta escasa diferencia en la votación evidencia la importancia de las irregularidades de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el 05 distrito electoral federal del Estado de Michoacán con cabecera en la ciudad de Zamora, por que (*sic*) el surgimiento de cualquiera de estas irregularidades pudo ser la causa de que un determinado partido fuera el triunfador, puesto que si las anomalías no se hubieran producido, el resultado podría haber sido otro.

Todo lo anterior, se considera suficiente por esta Sala Superior para decretar la nulidad de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa realizada en el distrito electoral federal 05 en Zamora, Michoacán, por violaciones graves y generalizadas, actualizándose la causal genérica de nulidad.

En la medida en que se ha considerado que con los anteriores hechos se acreditó la afectación de principios fundamentales de toda elección en un sistema democrático, debe revocarse la sentencia impugnada y decretarse la nulidad de la elección en estudio por la actualización de la causal abstracta (p. 285-6 de la sentencia).

La conclusión de la Sala Superior fue que debido a las pruebas aportadas y los argumentos vertidos tendría que anularse la elección porque el análisis de las conductas impugnadas, valoradas en su conjunto, conducen a dudar acerca del resultado de la elección y si se toma en cuenta que la diferencia entre el primero y el segundo lugares es bastante escasa no se puede determinar con certeza quién fue el ganador.

La Magistrada que decidió incorporar una salvedad de voto, a pesar de haber apoyado la sentencia, precisó que las irregularidades cometidas previamente a la jornada electoral no deben ser tomadas en cuenta para anular una elección; sin embargo, argumentó que si se cometen infracciones durante los tres días previos a las votaciones, aquellas tienen que ser analizadas para determinar la manera que impactaron en los electores (p. 289 de la sentencia).

En lo referente a Zamora, la Magistrada concluyó que la intervención

de funcionarios públicos municipales y la circulación de propaganda religiosa afectaron la jornada electoral:

No debe pasarse por alto, y esto es lo que considero de suma gravedad, y que no puede soslayarse, que durante los actos de campaña se utilice propaganda religiosa, o inclusive, como ocurrió en el caso, el propio día de la jornada electoral, en que se distribuyeron los cuadernillos que enaltecían la figura del candidato Arturo Laris, colocándolo como una persona fuertemente ligada a la religión católica, a órdenes religiosas como los jesuitas y usando hasta la imagen de la Virgen de Guadalupe, en los cuadernillos que se distribuyeron en un conglomerado social constituido por una mayoría de gente que profesa el catolicismo, según hecho público y notorio; cuadernillo en el que, además, como ya lo indiqué y lo vuelvo a resaltar, se prometía la rifa de una bicicleta, todo lo cual, en mi concepto, constituyen hechos que por sí mismos son reveladores de irregularidades graves, gravísimas, pues contravienen, de manera abierta, a la normatividad electoral que prohíbe, tajantemente, a los partidos políticos utilizar símbolos religiosos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda, así como de tratar de inducir el sufragio a cambio de regalos, como son las bicicletas (p. 290 de la sentencia).

245

Respecto al voto particular del Magistrado que no estuvo de acuerdo con la sentencia, éste argumentó que a pesar de la jurisprudencia que integró la causal abstracta de nulidad al no estar plenamente tipificada en la legislación, la autoridad jurisdiccional debía regirse por el principio de la conservación de los actos públicos, esto es, ante irregularidades no acreditadas fehacientemente es preferible mantener el resultado de la elección que determinar su nulidad.

En la especie, no obstante que quedaran acreditadas las irregularidades que invoca el recurrente, tal proceder no puede provocar la nulidad de la elección, si el legislador no las previó como supuestos de semejante sanción, pues supone la negación del derecho al voto, no sólo a los electores cuyos sufragios quedan inválidos, sino también a los receptores de esos votos. Es por ello que mantener la voluntad expresada en votos válidos, debe constituir criterio preferente en el momento de aplicar las normas electorales; y si bien es cierto que debe protegerse el resultado de las votaciones de cualquier manipulación que pudiere alterar la voluntad popular, también lo es que resulta necesario defender la eficacia de los votos válidamente emitidos de irregularidades que carecen de la entidad suficiente, según las tesis a que se ha hecho referencia.

En consecuencia, no habiéndose previsto tal sanción para otras irregularidades, que las expresamente señaladas por el legislador en los preceptos

legales antes invocados, acotadas también de manera expresa a las acontecidas el día de la jornada electoral, no cabe, su aplicación o extensión, ni siquiera bajo la pretensión de hacer vigentes los postulados de la Ley Fundamental en que se sustenta el Estado Mexicano, a otras irregularidades ocurridas con antelación (p. 297-8 de la sentencia).

Los dos votos anteriores nos permiten profundizar en las diferencias entre la mayoría de la Sala Superior y la minoría de los Magistrados; es claro que mientras el grupo mayoritario postula la causal abstracta como un mecanismo adicional de impugnación y protección, para la minoría tal causal no tiene razón de ser y puede considerarse que rebasa el marco legal. Esta discusión tiene como centro la posibilidad de impugnar otras conductas además de las tipificadas y el papel del Tribunal Electoral respecto a la interpretación de las insuficiencias legales.

EL CASO DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Uno de los asuntos derivados de las anulaciones en los distritos de Torreón y Zamora era determinar si los resultados por la vía proporcional tendrían que ser descontados al haberse decretado la nulidad por la mayoría relativa (SUP-REC-057/2003). La problemática anterior impactaría el cómputo de representación proporcional porque derivado de la solución que se tomara se modificaba el número de escaños asignados a dos partidos políticos y también se alteraba la adjudicación a las fórmulas de otro partido.

La resolución que se formuló sentó precedente para que cuando en el futuro se determine la nulidad de una elección por la vía mayoritaria, también tendrá que descontarse la votación de la representación proporcional correspondiente. La Sala Superior determinó que como las votaciones se efectúan de manera concurrente, con las mismas boletas y con la misma expresión simbólica para indicar las preferencias del elector, al decretarse la nulidad por la mayoría relativa, al mismo tiempo, tenía que sancionarse con el descuento de los votos correspondientes a la representación proporcional.

El instituto político recurrente argumenta que, si para hacer la asignación de diputados de representación proporcional, la autoridad responsable no

tomó en cuenta los resultados de la elección del 06 distrito electoral federal con cabecera en Torreón, Coahuila, tampoco debió hacerlo respecto de los resultados de la elección de diputados del 05 distrito con cabecera en Zamora, Michoacán, siendo que se trataba de cuestiones similares a las que ocurrieron con la elección anulada en aquel otro distrito electoral federal, con lo cual al Partido del Trabajo se le restó una diputación.

En efecto, de la interpretación sistemática de los artículos 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, párrafo 1, inciso c); 52, párrafos 2 y 4; 56, párrafo 1, incisos c) y e); 57, párrafo 2; 62, párrafo 1, inciso a), fracciones I y III; 63, párrafo 1, inciso c), fracciones I y II, y 78, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se arriba a la convicción de que los efectos de la declaración de nulidad de una elección en un distrito electoral federal, necesariamente deben repercutir respecto de los resultados de la elección de diputados por ambos principios, de acuerdo con lo siguiente (p. 102-3 de la sentencia).

Aquí cabe tener presente que, conforme lo dispone el artículo 205, párrafo 2, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las boletas para la elección de diputados por mayoría relativa y representación proporcional contienen un solo espacio por cada partido político para comprender la fórmula de candidatos y la lista regional, es decir, que el mismo sufragio plasmado en la boleta única tiene efectos para elegir diputados por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, de manera que el elector mediante un mismo acto decide quiénes serán sus representantes por ambos principios.

Por estas razones, es innegable que si se estima que ese elector estuvo influenciado de manera indebida al momento de emitir su voto, no puede sostenerse, validamente (*sic*), que sólo lo estuvo respecto de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y no así para la de diputados por el principio de representación proporcional, toda vez que en la misma acción queda expresado el sentido del voto, al ser la misma boleta, es decir, en este caso no puede quedar desligada esa manifestación de alguna de esas dos elecciones (p. 107 de la sentencia).

La determinación del descuento también afectó la asignación de curules a los partidos, ya que el PT obtuvo un escaño adicional que le fue restado al PRD; en el caso de Convergencia hubo una modificación en la adjudicación a una de sus fórmulas, lo que significó un impacto a nivel de circunscripción, aunque no en el total de sus asignaciones.

Con base en los resultados derivados del procedimiento de asignación de diputados por el principio de representación proporcional se advierte que en cuanto a las asignaciones que la autoridad responsable realizó a favor de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, no existe modificación alguna, por lo cual, deben confirmarse en los

términos en que fueron otorgadas; quedando en condición suspensiva las constancias de asignación relativas al Partido Revolucionario Institucional correspondientes a las fórmulas ubicadas en el lugar catorce de la tercera circunscripción plurinominal y el lugar diez de la quinta circunscripción.

Por otra parte, por lo que se refiere a las asignaciones otorgadas a favor de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, si existen discrepancias entre lo resuelto por el Consejo General del Instituto Federal Electoral y el procedimiento desarrollado por esta Sala Superior, por ende, procede realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con lo siguiente.

En lo concerniente al Partido de la Revolución Democrática, se deben confirmar las asignaciones que le otorgó el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en relación con la primera, tercera, cuarta y quinta circunscripciones, revocándose la constancia de asignación otorgada a favor de la fórmula de candidatos que ocupa el número cuatro de la lista de la segunda circunscripción de ese instituto político, conformada por Manuel de Jesús de la Cruz Ramírez, como propietario, y Julia Arcelia Olguín Serna, toda vez que sólo le corresponden tres diputaciones en la mencionada segunda circunscripción.

En lo relativo al Partido del Trabajo deberán confirmarse las constancias de asignación otorgadas a las fórmulas de candidatos de la primera, segunda, tercera y cuarta circunscripción, y en virtud de que le corresponde la asignación de una diputación adicional a las que le había asignado la autoridad responsable, que debe ser de la quinta circunscripción plurinominal, la constancia de asignación respectiva se deberá otorgar a favor de la fórmula de candidatos integrada por Oscar González Yáñez, como propietario y Herón Agustín Escobar García, como suplente.

En cuanto al partido Convergencia, se debe confirmar la asignación realizada por la autoridad responsable respecto de la tercera y cuarta circunscripción, debiendo otorgársele una constancia más en la segunda circunscripción, que corresponde a la fórmula de candidatos conformada por González Schmal Jesús Porfirio, como propietario y, Flores Siller José Luis, como suplente; mientras que, en la quinta circunscripción debe confirmarse la constancia de asignación otorgada a la primera fórmula de candidatos de la lista respectiva y revocarse la constancia de asignación otorgada a la fórmula de candidatos integrada por Walton Aburto Luis, como propietario, y Abarca Escamilla Francisco Xavier (p. 152-3 de la sentencia).

La otra situación que también resolvió la Sala Superior fue dejar en condición suspensiva dos de las asignaciones para el PRI, en virtud de que si éste gana los distritos le serán adjudicadas una curul al PRD y otra al PRI; en caso contrario, si el PRI llega a perder los distritos a éste partido se le asignaran los escaños de representación proporcional faltantes.

Tomando en consideración que deberán celebrarse elecciones extraordinarias de diputados por el principio de mayoría relativa en los distritos electo-

rales federales 05 del Estado de Michoacán, con sede en Zamora y el 06 del Estado de Coahuila con cabecera en el municipio de Torreón, así como que al Partido Revolucionario Institucional se le aplicó el tope en el número de diputados que por ambos principios puede tener un solo partido político, según lo dispone la fracción V del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible que de obtener el triunfo en las elecciones extraordinarias en ambos distritos o en alguno de ellos se debe prever como quedaría la conformación de la Cámara de Diputados en caso de que alguno de esos supuestos ocurriera al concluir las elecciones extraordinarias, por estas razones, desde ahora se establece lo siguiente.

1. En caso de que el Partido Revolucionario Institucional no obtenga el triunfo en ninguno de los dos distritos electorales, las fórmulas de diputados ubicadas en el lugar catorce de la tercera circunscripción y en el lugar diez de la quinta circunscripción, que quedan en condición suspensiva dejarán de serlo y se deberán otorgar las constancias de asignación respectivas, pues en ese caso no habría modificación alguna al procedimiento desarrollado en esta resolución.

2. Si el Partido Revolucionario Institucional obtiene el triunfo en uno de los dos distritos, entonces dejarán de tener la condición suspensiva las fórmulas que se dejan en ese estado y se otorgará sólo una de las constancias de asignación y se expedirá una constancia de asignación adicional al Partido de la Revolución Democrática.

3. Si el Partido Revolucionario Institucional obtiene el triunfo en los dos distritos, entonces dejarán de tener la condición suspensiva las fórmulas que se dejan en ese estado y no se otorgará la constancia de asignación de ninguna de ellas, en cambio se otorgará una constancia de asignación adicional al Partido Acción Nacional y la otra al Partido de la Revolución Democrática." (p. 153-4 de la sentencia).

Por su parte, el voto particular de un Magistrado tuvo como centro de argumentación la inexistencia de precepto legal alguno o de jurisprudencia que indique la posibilidad de descontar los votos de la vía proporcional al haberse anulado el resultado de la mayoría relativa.

Con independencia de lo expuesto, desde mi perspectiva, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional de la normativa electoral que regula el sistema de nulidades en la materia, puede arribarse a la conclusión de que no está prevista la nulidad de la elección de diputados de representación proporcional, ni la nulidad de un cómputo distrital para esa misma elección, por lo que la eventual anulación que se decreta de la elección de diputados de mayoría relativa en un determinado distrito electoral, no puede afectar al cómputo distrital correspondiente a la misma demarcación geográfica electoral relativo a la elección de diputados de representación proporcional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la ley procesal electoral federal y según se razona a continuación.

Conforme con lo previsto en el artículo 52, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando se pretenden impugnar las elecciones de diputados por ambos principios, en los supuestos previstos en los incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo 50 de ese ordenamiento, es decir, por nulidad de votación recibida en casilla o error aritmético, el promovente está obligado a presentar un solo escrito; sin embargo, ello se contempla como una posibilidad y no como una obligación, esto es, es jurídicamente factible impugnar la elección de diputados por un solo principio (p. 173-4 de la sentencia).

De igual forma, en el capítulo III del título sexto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, denominado "De la Nulidad de la Elección de Diputados o de Senadores", conformado con los artículos 77 a 78, en relación con el 50, párrafo 1, incisos b), fracción I, y c), fracción I, así como 71, párrafo 2, únicamente se hace referencia a la nulidad de elección de diputados de mayoría relativa en un distrito uninominal o de senadores en una entidad federativa, lo que, en concordancia con el punto anterior, lleva a concluir que en el sistema normativo electoral federal no está prevista la nulidad de la elección de diputados o senadores por el principio de representación proporcional (p. 178 de la sentencia).

El argumento del Magistrado nos remite nuevamente a la capacidad de interpretación del Tribunal Electoral; sin decirlo explícitamente, el voto particular se dirige a la insuficiencia de la legislación para determinar la nulidad en la representación proporcional.

CONSIDERACIONES FINALES

De la revisión anterior podemos entresacar algunas consideraciones. La aplicación de las causales genérica y abstracta para anular las elecciones en los distritos de Torreón y Zamora incorpora mecanismos de impugnación para futuros comicios, lo cual orienta el papel del Tribunal Electoral como un organismo garante de los derechos políticos.

El problema de las causales genérica y abstracta, como quedó evidenciado en los votos particulares de las dos sentencias, es la valoración de los criterios para determinar qué conductas e indicios son suficientes para decretar la nulidad de la elección.

En esto la autoridad jurisdiccional tiene una ardua tarea que debe acometer en lo inmediato para lograr plantear claramente cuáles van a ser los criterios a usar en un futuro y cómo se van a sustentar los indicios

que se consideren pertinentes para que sean valorados ante una posible anulación.

Por otra parte, al determinar la Sala Superior que cuando se anulen los resultados de mayoría relativa tienen que descontarse los votos de la representación proporcional, se sienta un precedente de las soluciones para el futuro que, eventualmente, puede convertirse en jurisprudencia.

Aquí también quedan cuestiones para delante. Definir los descuentos implicará que en las elecciones de órganos colegiados, legislativos y ayuntamientos, cuando se presenten anulaciones por la mayoría relativa se tendrán que descontar los votos en la representación proporcional.

Empero, el problema no es lo anterior sino que la Sala Superior tiene que dejar muy clara cual será la situación ante dos elecciones concurrentes de mayoría relativa como son las de Diputados Locales y Gobernadores o de Legisladores Federales y Presidente de la República.

Con el argumento de la nulidad de un distrito de mayoría relativa podría presentarse la situación de una demanda de anulación simultánea de la elección de ejecutivos y de legisladores porque al final de cuentas la votación viciada fue recibida en las mismas casillas; esta es la razón por la cual, la autoridad jurisdiccional debe dejar claro cuál es el alcance del descuento para evitar posibles confusiones.

Finalmente, sería conveniente que se definiera cuál será el papel del Tribunal Electoral ante las insuficiencias legales, ya que ha sido reiterado el enfrentamiento de visiones de los propios Magistrados ante la posibilidad de ampliar las competencias del propio Tribunal, vía la jurisprudencia, o constreñirse únicamente a la tipificación legislativa con el riesgo de no tomar en cuenta situaciones que si bien no están reguladas sí tienen impacto en los resultados electorales.

BIBLIOGRAFÍA

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL (1997), México, TEPJF.

Caso Torreón: Sentencias SUP-REC-009/2003 y SUP-REC-010/2003 consultables en www.trife.org.mx.

Caso Zamora: Sentencia SUP-REC-057/2003 consultable en www.trife.org.mx.

Caso Representación Proporcional: Sentencia SUP-REC-034/2003 consultable en www.trife.org.mx.

Jurisprudencia Electoral consultable en www.trife.org.mx

Boletín de prensa No. 047/2003 del 28 de agosto de 2003 consultable en www.trife.org.mx.